



Al servicio de la Justicia y de la paz social

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL

MAGISTRADO SUSTANCIADOR
MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Medellín D.E. de C., T., e I., veintisiete de abril de dos mil veintitrés.

PROCESO	Ejecutivo
DEMANDANTE	Al Mensajero S.A.S.
DEMANDADO	Cooperativa de Hospitales de Antioquia – COHAN-
PROCEDENCIA	Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín
CUDR	05001-31-03-005–2021-00398-01
RADICADO INTERNO	020-23
PROVIDENCIA	083-23
DECISIÓN	Para que pueda librarse mandamiento ejecutivo, es necesario que la obligación que se reclama cumpla con todos los requisitos que se exigen para su recaudo por esta vía, esto es, que sea clara, expresa y actualmente exigible y si, además, si se hace valer un título valor, los que las disposiciones mercantiles exijan al respecto. Si el documento adunado como título ejecutivo, carece de alguno de los requisitos que la ley exige, deberá denegar el mandamiento ejecutivo pretendido. CONFIRMA.

ASUNTO A RESOLVER

Procede el Despacho a resolver la apelación formulada por la parte demandante en contra del auto del 19 de enero de 2022, en cuanto a la decisión que denegó el mandamiento de pago respecto de las facturas AM748, AM749 Y AM765, toda vez que en la mismas no se encuentra debidamente acreditado el adquirente.

ANTECEDENTES

1.- Hechos y pretensiones. Al Mensajero S.A.S. presentó demanda ejecutiva en contra de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia –COHAN-, para que se librara orden de pago con fundamento de las facturas AM122, por valor de

\$355.694.000 y AM748 por \$136.109.768, más los intereses moratorios generados desde el 24 de junio de 2021 y hasta que se satisfagan completamente las mencionadas obligaciones; y por el capital contenido en las facturas números AM749, por valor suma de \$29.330.748 y AM765 por \$1.162.772.

2.- Trámite. La demanda fue repartida al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medellín el 29 de octubre de 2021, el que, mediante auto del 19 de enero de 2022, libró mandamiento de pago por la factura AM122 por valor de \$355.694.000, pero negó la orden de apremio respecto de las demás facturas, esto es, AM748, AM749 Y AM765, al considerar que el adquirente en los citados títulos valores no se encontraba acreditado. Sostuvo que, en las mencionadas facturas, tanto el emisor como el receptor o beneficiario del servicio, es la misma persona jurídica, por ende, en principio no podían tenerse como prueba contra el demandado.

3.- La apelación. Oportunamente el vocero judicial de la demandante, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, argumentando que, no se tuvo en cuenta por parte del fallador que, los demás datos establecidos en la representación gráfica de las facturas electrónicas, se corresponden de manera efectiva a la entidad ejecutada, pues allí se acredita el NIT y las direcciones física y electrónica de la receptora.

Dijo que, si bien la presentación gráfica presenta la inconsistencia mencionada por el Juzgado de primera instancia, la representación del archivo PDF, se encuentra de manera correcta, así mismo, que lo que identifica verdaderamente al receptor es el NIT (Número de Identificación Tributaria), por tanto, encontrándose dicha información plasmada de manera correcta, es razonable inferir que el deudor es COHAN.

Resaltó que, conforme a lo dispuesto en la resolución 00042 de 2020, expedida por la DIAN, la factura incluso puede ser emitida cuando no se cuenta con la identificación del receptor, pues en principio el NIT, es el número que permite individualizarlo. Refirió que, conforme a ello, si la facturación electrónica puede ser expedida incluso sin datos de identificación, al encontrarse acreditados el NIT como la dirección del receptor, el mencionado requisito se entiende suplido en debida forma.

Sostuvo que, si debe entregarse el formato PDF de la factura generada

electrónicamente, y este formato se encuentra todos los datos del adquirente incluido en nombre comercial, deben entenderse cumplidos los requisitos formales de la factura.

El *a quo* no repuso su decisión y concedió la apelación interpuesta en forma subsidiaria mediante proveído del 14 de febrero de 2022, aduciendo que, cada documento en forma individual debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que establece la legislación. Adujo que del estudio de las facturas AM748, AM749 y AM765, no se tiene la certeza de cuál es el verdadero receptor de los citados cambiales; así mismo, toda factura, además de contener el número del NIT tanto del vendedor o de quien presta el servicio como del adquirente, debe tener el nombre de ambas partes, exigencia que no se pueda pasar por alto.

CONSIDERACIONES

1.- Proceso ejecutivo. Para la recuperación de las obligaciones por parte del acreedor frente a su deudor, ante la negativa de éste a su reconocimiento de manera voluntaria, consagró el legislador el proceso ejecutivo, donde el operador jurídico se encarga de hacer efectivo el pago, con el producto de la venta en pública subasta de los bienes del obligado, que constituye la prenda general de los acreedores, previo embargo y secuestro sobre los mismos.

El tratadista JAIME AZULA CAMACHO¹, enuncia como presupuestos de este proceso, los siguientes:

“A) La existencia de un título ejecutivo. Responde al aforismo acuñado por el derecho romano de nulla executio sine titulo, el cual significa que no hay proceso ejecutivo si no existe el título que contenga la obligación cuyo cumplimiento pueda exigirse por esa vía.”

“Lo anterior entraña que si el acreedor carece de título ejecutivo, debe proporcionárselo mediante el correspondiente proceso declarativo de condena, que es la vía indicada para llegar a él, o bien con la declaración de parte obtenida como prueba anticipada.”

“B) La existencia del acreedor o titular de la obligación, cuya calidad debe estar plenamente demostrada.”

“C) La existencia del deudor u obligado, igualmente demostrada.”

¹ Citando el criterio de EMILIO REUS, en su obra “MANUAL DE DERECHO PROCESAL”. Tomo IV. Procesos Ejecutivos. Cuarta Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2003. Pág. 4.

Ahora, nuestra legislación contempló dicho trámite en el artículo 422 y s.s. del Código General del Proceso, que contempla que pueden demandarse ejecutivamente, las obligaciones claras, expresas y exigibles, *“que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él”*.

La obligación es *clara*, cuando en el documento se indican todos los elementos que la conforman, esto es, se encuentra debidamente determinada, especificada y patente; que tanto su objeto, que es el crédito, como sus sujetos, acreedor y deudor, se hallen inequívocamente reseñados, lo que indica que debe constar por escrito como requisito *ad-solemnitatem*. Es *expresa*, cuando se ilustra de tal manera, que no existan dudas, o se requiera deducir o derivar de presunciones. Y es *exigible*, si se trata de una obligación pura y simple, o que cuando habiéndose sujetado a condición o plazo, éste se ha vencido o aquélla se ha cumplido.

Se tiene entonces que, conforme a la ley, quien pretenda el recaudo judicial, esto es, por vía ejecutiva, de una obligación, debe allegar con la demanda un documento donde conste ésta de manera clara y expresa, que acredite su exigibilidad y legitimación tanto por activa, como por pasiva.

Si el documento adunado como título ejecutivo, carece de alguno de los requisitos que la ley exige, deberá denegar el mandamiento ejecutivo pretendido.

Así lo expone el doctrinante JAIME AZULA CAMACHO²:

“En caso de que el documento contentivo de la obligación cuyo pago se pretende no reúna los requisitos de título ejecutivo y sea imposible subsanarlos, lo indicado es negar el mandamiento solicitado. Ciertamente no existe en el Código de Procedimiento Civil una norma que expresamente disponga la negativa del mandamiento ejecutivo, pero esta tácitamente se desprende de la regulación que se hace.”

2.- La Factura. La factura es uno de los títulos valores enlistados en el Código de Comercio y se encuentra definida en el artículo 772 de dicho Estatuto, en los siguientes términos: *“Factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio.”*

² En su obra “MANUAL DE DERECHO PROCESAL”. Tomo IV. Procesos Ejecutivos. Cuarta Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá, 2003. Pág.59.

Ahora, para que la factura pueda considerarse como un título valor, debe reunir, además de los requisitos enunciados en el artículo 621 del Código de Comercio y el precepto 617 del Estatuto Tributario, los enlistados en el artículo 774 del citado Código. Por tanto, en el contenido de esta debe figurar:

“1. La fecha de vencimiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 673. En ausencia de mención expresa en la factura de la fecha de vencimiento, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días calendario siguientes a la emisión.”

“2. La fecha de recibo de la factura, con indicación del nombre, o identificación o firma de quien sea el encargado de recibirla según lo establecido en la presente ley.”

“3. El emisor vendedor o prestador del servicio, deberá dejar constancia en el original de la factura, del estado de pago del precio o remuneración y las condiciones del pago si fuere el caso. A la misma obligación están sujetos los terceros a quienes se haya trasferido la factura.”

En armonía con lo exigido en el numeral 2°, preceptúa el artículo 773 del Estatuto mercantil, en la parte pertinente de su inciso 2°, que:

“...deberá constar el recibo de la mercancía o del servicio por parte del comprador del bien o beneficiario del servicio, en la factura y/o en la guía de transporte, según el caso, indicando el nombre, identificación o firma de quien recibe, y la fecha de recibo. El comprador del bien o beneficiario del servicio no podrá alegar falta de representación o indebida representación en razón de la persona que reciba la mercancía o el servicio en sus dependencias, para efectos de la aceptación del título valor.”

Ante la ausencia de cualquiera de estos requisitos, estatuye la misma norma en su inciso 2°:

“No tendrá el carácter de título valor la factura que no cumpla con la totalidad de los requisitos legales señalados en el presente artículo. Sin embargo, la omisión de cualquiera de estos requisitos, no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura.”

Aunado a lo anterior y al tenor de lo consagrado en el precepto 773 del Estatuto Mercantil, se considerará que el negocio que originó la factura, una vez ésta sea aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, ha quedado debidamente ejecutado en la forma que allí se ha contemplado.

Es decir que, además, para poder ejecutar la obligación incorporada en una factura, se exige que la misma haya sido aceptada por el comprador o beneficiario

del servicio, según sea el caso, la cual puede ser expresa o tácita, según lo establecido en la norma que viene de citarse.

En cuanto a la expresa señala que ésta deberá ser por escrito en el cuerpo de la respectiva factura, o en un documento separado, ya sea físico o electrónico.

Frente a la aceptación tácita, expresa en el inciso 4° del artículo 773 antes citado, la forma para que opere la misma, de la siguiente manera:

“La factura se considerará irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según sea el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a su recepción. En el evento en que el comprador o beneficiario del servicio no manifieste expresamente la aceptación o rechazo de la factura, y el vendedor o emisor pretenda endosarla, deberá dejar constancia de ese hecho en el título, la cual se entenderá efectuada bajo la gravedad del juramento.”

De lo anterior puede colegirse, que una vez suscrita la factura por su receptor, sea éste directamente el comprador o beneficiario del servicio, o la persona encargada para tal efecto, aquél tendrá el término de diez (10) días calendario para manifestar si acepta su contenido o lo rechaza, y en el evento de guardar silencio, por ministerio de la ley se presume que la misma ha sido aceptada de manera irrevocable, y al mismo tiempo, que el negocio que dio origen a su emisión fue debidamente ejecutado.

De otro lado, respecto de la factura electrónica, el Decreto 1349 de 2016, mediante el cual se regula la circulación de ésta como título valor, en su artículo 2.2.2.53.2 numeral 7, la definió como aquella *“consistente en un mensaje de datos que evidencia una transacción de compraventa de bien(es) y/o servicio(s), aceptada tácita o expresamente por el adquirente, y que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio.”*

3.- Caso concreto. En el *sub judice*, Al Mensajero S.A.S., por intermedio de apoderado judicial, presentó demanda ejecutiva en contra de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia –COHAN-, pretendiendo el pago de las facturas identificadas con los números AM122, AM748, AM749 y AM765.

Por considerar que no se verificaba el adquirente en las facturas AM748, AM749 y AM765, pues figuraba tanto en el emisor como en el receptor la misma persona jurídica, el Juzgado de primer grado negó el mandamiento de pago deprecado frente a estas.

Contra esta decisión, el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. Arguyó que, si bien el nombre del receptor no se encuentra anotado en los mencionados documentos presentados como base de recaudo, los demás datos indicados, como son el NIT, la dirección física como electrónica sí corresponden al emisor. Aunado a ello, el artículo 11 de la Resolución 00042 de 2022 de la DIAN, autoriza que la factura pueda ser emitida, cuando se no tiene el nombre del aceptante, con el NIT del sujeto receptor, con lo que este queda individualizado.

De lo expuesto en precedencia, el problema jurídico se circunscribe de determinar si efectivamente las facturas electrónicas AM748, AM749 y AM765, cumplen con todos los requisitos consagrados en los artículos 621, 772 y 774 del Código de Comercio y 617 del Estatuto Tributario, tal y como lo afirma la parte recurrente, y, en consecuencia, se debe librar mandamiento de pago por las mismas.

En efecto, si se observa la representación gráfica de las facturas digitales aportadas como base de recaudo números AM748, AM749 y AM765, puede verificarse que en los datos del emisor/vendedor, aparece Al Mensajero S.A.S., NIT 901172265, régimen fiscal 0-47, dirección calle 25 Nro. 65B-32 Barrio Antioquia de Medellín. En los datos de adquirente/comprador, se evidencia a Al Mensajero S.A.S., NIT. 890985122, régimen fiscal R-99-PN, cuya dirección es carrera 48 Nro. 24-104, Avenida Los Industriales de Medellín.

Ahora, el artículo 617 del Estatuto Tributario, establece unos requisitos que deben cumplirse al momento de la expedición de la factura, así:

“...Para efectos tributarios, la expedición de factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la misma, con el lleno de los siguientes requisitos:

- a) *Estar denominada expresamente como factura de venta.*

- b) *Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.*
- c) ***Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, junto con la discriminación del IVA pagado.***
- d) *Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturas de venta.*
- e) *Fecha de su expedición.*
- f) *Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.*
- g) *Valor total de la operación.*
- h) *El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura.*
- i) *Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. (Negrilla intencional).*

Como puede observarse, conforme a la normativa transcrita, la factura además de contener el NIT del adquirente, debe contener sus apellidos u nombre, para este caso, la razón social de la Cooperativa demandada, por tanto, adoleciendo de tal requisito, necesariamente debía negarse el mandamiento de pago, toda vez que el título valor que en principio contiene una obligación, no reúne los requisitos de ley.

Es que, la misma parte ejecutante reconoce la inconsistencia en el nombre comercial del comprador o adquirente en la representación gráfica de las facturas, no obstante, pretende tener por subsanada tal falencia con los demás datos indicados en el mencionado documento, lo que para la Sala resulta improcedente, ya que, de acuerdo con la exigencia aludida, todos los requisitos deben confluir. Y frente a este argumento, hay que advertir por parte de la Sala que, la norma de ninguna manera autoriza realizar elucubraciones para desentrañar o inferir de manera efectiva el nombre o razón social del obligado, pues esta debe aparecer de manera diáfana en el título valor.

Con todo, aunque en la demanda ejecutiva se pretenda el cobro de unas facturas electrónicas, de conformidad con la normatividad reseñada se debe seguir con los mecanismos ordinarios para su cobro en su calidad de la factura de venta (no electrónica) como título valor; y al realizar dicho estudio, evidencia esta Magistratura que no se cumple con el literal c) del artículo 617 del Estatuto

Tributario, lo que resulta en la confirmación del auto que negó librar el mandamiento.

En esa medida, como los mencionados documentos aportados como base de ejecución no cumplen con la totalidad de los requisitos de ley, se confirmará la decisión apelada, sin lugar a condena en costas dada su no causación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, **CONFIRMA** el auto proferido por el JUZGADO QUINTO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el 19 de enero de 2022, dentro del proceso EJECUTIVO instaurado por AL MENSAJERO S.A.S. en contra de la COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA –COHAN-.

Sin lugar a condena en costas, dada su no causación.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE



MARIO ALBERTO GÓMEZ LONDOÑO

Magistrado

Firma escaneada, conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022